

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚMERO: **** **

ACTOR: **** ***, a
través de su apoderado legal **** ***,
**** **.

AUTORIDADES DEMANDADAS: 1)
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES y 2) JEFE
DEL DEPARTAMENTO DE LA PENSIÓN
MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Aguascalientes, Aguascalientes, seis de diciembre de
dos mil diecinueve.

V I S T O S para resolver en definitiva los autos del
juicio de nulidad número **** **, y;

RESULTANDO:

I.- Mediante escrito presentado en Oficialía de Partes
del Poder Judicial del Estado, el día *doce de junio de dos mil diecinueve*,
remitido a esta Sala al día hábil siguiente, **** ***,
**** **, a través de su apoderado legal **** **,
**** **, demandó de las autoridades al rubro indicadas, la nulidad de
los actos administrativos que precisó en los siguientes términos:

“...la **NULIDAD** del crédito fiscal sin número, por la
cantidad de \$ 25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N)
derivado de la inspección folio **** **, de fecha 30 de mayo de 2019, el cual
niego lisa y llanamente que exista, puesto que a la fecha no se me ha
notificado de manera legal el supuesto crédito.

Así como la ilegal detención de mi vehículo por la Coordinación
General de movilidad, con fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve,
...”

II.- El *diecisiete de junio de dos mil diecinueve* se admitió a
trámite la demanda, se recibieron las pruebas ofrecidas y se ordenó el
emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas.

III.- Por auto de *veinticuatro de julio de dos mil diecinueve*, se
declaró por perdido el derecho de la autoridad demandada JEFE DE

DEPARTAMENTO DE LA PENSIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, para formular contestación de demanda y se requirió a la COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD, por la exhibición de copias de su escrito de contestación de demanda para correr traslado.

IV.- Mediante proveído de *veintiocho de agosto de dos mil diecinueve*, se tuvo por cumpliendo con el requerimiento formulado y se admitió la contestación de la demandada formulada por la COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD, pronunciándose esta Sala en relación a las pruebas ofrecidas y se ordenó correr traslado al actor para formular ampliación de demanda.

V. Por acuerdo del *veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve*, se tuvo a la parte actora formulando ampliación de demanda, siendo que en dicha ampliación de demanda, la parte actora en adición a los actos impugnados originalmente, también impugnó el acto que describió como:

“...LA NEGATIVA FICTA RECAÍDA A MI SOLICITUD DE DERECHOS DE RENOVACION DE CONCESIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO A QUE ALUDE LA AUTORIDAD DEMANDADA...”

VI. Mediante proveído del *veintinueve de octubre de dos mil diecinueve*, se tuvo a la demandada COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD, dando contestación a la ampliación de demanda y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia de juicio.

VII.- En la audiencia de juicio que fue celebrada el día de hoy, se desahogaron las pruebas admitidas a las partes, posteriormente se pasó al periodo de alegatos, y se citó el asunto para sentencia definitiva, que se dicta bajo los siguientes;

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, es competente para conocer del presente juicio, conforme a los artículos 51, párrafo segundo, y 52, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de

Aguascalientes; 33-A y 33-F, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado y artículos 1º y 2º, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, en virtud de que se impugnan actos administrativos así como una negativa ficta atribuidos todos ellos a una autoridad del Estado de Aguascalientes; que el particular afirma le causan agravio.

SEGUNDO. Precisión y existencia de los actos impugnados:

a) Por lo que hace a la demanda inicial.

Con fundamento en el artículo 60, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, y a fin de fijar con exactitud la cuestión a resolver, se precisa que los actos impugnados en el presente juicio lo son:

1.- El crédito fiscal por la cantidad de \$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que dice **el demandante**, deriva del Acta de Inspección con número de folio ********* del *treinta de mayo de dos mil diecinueve*, levantada por inspector adscrito a la Coordinación General de Movilidad del Estado de Aguascalientes.

2.- El aseguramiento de vehículo destinado a servicio de Transporte Público, impuesto como medida de seguridad según Acta de Inspección con número de folio ********* levantada el *treinta de mayo de dos mil diecinueve*, por inspector adscrito a la Coordinación General de Movilidad del Estado de Aguascalientes.

La existencia del aseguramiento de vehículo se acredita con el “acta circunstanciada de Inspección” que se acompañó a la demanda, de la que igualmente obra copia certificada a fojas **48 a 51** de los autos, por haberla exhibido la autoridad demandada; siendo una DOCUMENTAL pública, con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia contenciosa administrativa, conforme lo disponen los artículos 3 y 47 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes; al tratarse de un acta emitida por servidor

público en ejercicio de sus funciones.

b) Por lo que hace a la ampliación de demanda

3) Negativa ficta derivada —dice **el demandante**— de la solicitud de derechos de renovación de concesión para la prestación del Servicio de Transporte Público.

Precisados que han sido los actos impugnados por la parte actora, por razón de método, se estudiarán primero las causales de improcedencia que de oficio se advierten respecto a los actos 1) y 3), según se exponía en los considerandos TERCERO y CUARTO, en tanto que en el considerando QUINTO, se abordará el estudio de la diversa causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada y posteriormente en el SEXTO, los conceptos de nulidad expresados en contra del acto descrito (bajo el numeral 2).

TERCERO. Causa de improcedencia respecto al crédito fiscal que dice el demandante, deriva del Acta de Inspección con número de folio *****.

Previo al estudio de los conceptos de nulidad, por ser una cuestión de orden público, que impediría el estudio de aquellos, se procede oficiosamente, por lo que al mencionado acto se refiere, al estudio de la causal de improcedencia prevista en el artículo 26, fracción VI de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, que textualmente establece lo siguiente:

“ARTICULO 26.- Es improcedente el juicio ante la Sala, contra los actos:
...
VI.- De cuyas constancias de autos apareciera, de manera clara, que no existe la resolución o el acto impugnado;
...”

En el caso, la parte actora demanda entre otros actos, la nulidad del Crédito Fiscal derivado del acta de inspección con número de folio ***** , sin embargo, del contenido de la misma **no se advierte la existencia de crédito fiscal alguno.**

En efecto, del “Acta Circunstanciada de Inspección” con

número de folio *****, misma que obra en autos por haberse acompañado a la demanda, se obtiene que en ella, se hizo constar la imposición de la medida de seguridad consistente en el retiro de la circulación de vehículo destinado al Servicio de Transporte Público, y al final de la misma, la citación al infractor para que acudiere a las oficinas de la demandada “donde previos trámites de ordenanza, será dictada la resolución que proceda de acuerdo con los hechos constatados en la presente diligencia”, sin que de tal acta se desprenda la existencia de crédito fiscal alguno.

Luego, si del acta de inspección no se advierte la determinación de crédito fiscal alguno en contra del actor, ni tampoco se desprende su existencia de las demás actuaciones que integran el expediente, se actualiza la causal de improcedencia relativa a la inexistencia del acto impugnado.

Robustece lo anterior la tesis de jurisprudencia, Tesis: VI.3o.A. J/24, de la novena época, Tomo XV, Diciembre de 2002, página: 628, registro: 185384, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, que al rubro y texto dice:

“INEXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN O ACTO IMPUGNADO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. DIFERENCIA ENTRE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA Y SOBRESER EN EL JUICIO DE NULIDAD. Cuando el actor demanda la nulidad de un acto administrativo o fiscal y asegura que lo desconoce y, por ende, no puede exhibir con la demanda la prueba de lo impugnado, se actualiza el supuesto del artículo 209 bis, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, por lo que el tribunal debe admitir a trámite la demanda y emplazar a la autoridad demandada para que la conteste; si ésta niega la existencia de tal acto o resolución y el actor no logra desvirtuar esa negativa, el juicio carecerá de materia y procederá el sobreseimiento con base en los artículos 202, fracción XI y 203, fracción II, del citado código tributario. Cabe destacar que no debe confundirse este caso con el diverso de desechar de plano la demanda por inexistencia del acto impugnado, ya que en éste debe brindarse la oportunidad de defensa al actor para que, en ejercicio de su garantía de audiencia, aporte pruebas tendentes a demostrar la existencia del acto impugnado.”

Por lo dicho, procede decretar el SOBRESSEIMIENTO del presente juicio, por lo que hace al Crédito Fiscal derivado del acta de inspección con número de folio *****, atentos a lo dispuesto por el artículo 27 fracción II de la Ley del Procedimiento Contencioso

Administrativo para el Estado de Aguascalientes que establece:

“ARTICULO 27.- Procede el sobreseimiento del juicio.

...II.- Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguno de las causas de improcedencia a que se refiere el Artículo anterior;...

...El sobreseimiento se podrá decretar en cualquiera de los casos antes señalados de oficio o a petición de parte.”

CUARTO. Causal de improcedencia respecto a la negativa ficta impugnada en ampliación de demanda.

Con el objeto de cumplir con el principio de exhaustividad de las sentencias, esta Sala advierte que la parte actora en ampliación de demanda impugnó también la resolución **negativa ficta** que afirma, se configuró con el silencio de la autoridad, respecto a la *solicitud para la autorización del derecho de Renovación de Concesión para la Prestación de Transporte Público* presentada.

Impugnación de **negativa ficta** que resulta improcedente ante su **inexistencia**, en término de lo dispuesto por el artículo 26, fracción VI de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, que textualmente establece lo siguiente:

“ARTICULO 26.- Es improcedente el juicio ante la Sala, contra los actos:

...

VI.- De cuyas constancias de autos apareciera, de manera clara, que no existe la resolución o el acto impugnado;

...”

En el caso, la parte actora afirmó que se actualizaba la existencia del **silencio administrativo** por parte de la autoridad demandada, bajo el argumento de que había presentado una **solicitud de derechos de renovación de concesión para la presentación del servicio de transporte público**; sin que a la fecha hubiere habido —dice en su ampliación de demanda— respuesta de la autoridad a pesar de haber transcurrido más de *cuatro meses*.

No obstante, de la revisión al expediente en que se actúa, **no obra la *solicitud de renovación de concesión para la***

presentación del servicio de transporte público a que hace referencia la parte actora, documento indispensable para justificar que **el accionante** realizó una petición a la autoridad demandada, y que esta última, no le ha dado contestación.

Por lo tanto, al no haber acreditado el primero de los requisitos para la configuración de la **negativa ficta** demandada, consistente en la **solicitud a la autoridad demandada**, deviene inexistente el acto impugnado en ampliación de demanda por la parte actora.

Consecuentemente, se decreta el SOBRESEIMIENTO del presente juicio, por lo que hace a la **negativa ficta reclamada en ampliación de demanda**, atentos a lo dispuesto por el artículo 27 fracción II de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes que establece:

*“ARTICULO 27.- Procede el sobreseimiento del juicio.
...II.- Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguno de las causas de improcedencia a que se refiere el Artículo anterior;...
...El sobreseimiento se podrá decretar en cualquiera de los casos antes señalados de oficio o a petición de parte.”*

QUINTO. Estudio de la causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada.

Aduce la Coordinación General de Movilidad del Estado, que la actora carece de **interés legítimo** al no haber acreditado la propiedad del vehículo, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción I del artículo 26, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, debiendo decretarse el sobreseimiento del presente juicio.

Es **INFUNDADA** la causal de improcedencia

Es así, porque la actora acredita su interés legítimo como poseedora del vehículo objeto de aseguramiento, al haber exhibido copia certificada de la tarjeta de circulación a su nombre, respecto al automotor con placas de circulación *********, que

coinciden con las del vehículo a que se refiere el Acta de Inspección por virtud de la cual se decretó el aseguramiento del mismo como medida de seguridad, lo que acredita la afectación de la parte actora en su esfera jurídica y por tanto el interés legítimo para demandar la nulidad de la actuación administrativa que atribuye a la autoridad demandada.

En tal mérito, resulta improcedente decretar el sobreseimiento solicitado.

SIXTO Estudio de los conceptos de nulidad expresados en contra del Aseguramiento de Vehículo decretado como medida de seguridad en el acta de inspección.

Los conceptos de nulidad expresados por la parte actora, serán abordados cambiando el orden en que fueron propuestos, agrupándolos o desagregándolos, de acuerdo a su afinidad temática.

En el **PRIMER** concepto de nulidad del escrito inicial de demanda, expresa la parte actora que la resolución impugnada es ilegal, al violar lo dispuesto por el artículo 4º, fracción V, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, en razón de que carece de los requisitos de fundamentación y motivación, al desconocer los motivos y fundamentos que la originaron.

Agrega en el **SEGUNDO** concepto de nulidad del escrito inicial de demanda que el Acto Impugnado, incumple los **requisitos de motivación** a que se refiere el artículo 119 del Reglamento de Tránsito para el Estado de Aguascalientes.

Los conceptos de nulidad de análisis, son por una parte **INOPERANTES** y por otra **INFUNDADOS**, como a continuación se analiza.

Resultan en primer término **INOPERANTES**, al ser genéricos y superficiales.

Es así, porque la parte actora hace valer conceptos de nulidad para combatir la supuesta falta motivación del acta de inspección, al supuestamente incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 119 del Reglamento de Tránsito Para el Estado de

Aguascalientes.

Siendo que del Acta de Inspección Impugnada, se advierte:

- Que la autoridad actuante lo fue un inspector adscrito a la Dirección General de Transporte Público de la Coordinación General de Movilidad;
- Que el motivo de la actuación fue el realizar tareas de inspección en materia de transporte público;
- Que la autoridad fundamenta su actuación en términos de lo establecido por los artículos 275, 276 fracciones I, II, III y VI; 278, fracciones I y III, 279 y 280, fracción III de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes.

Por lo que el argumento de la parte actora deviene inoperante al referirse en su razonamiento al Reglamento de Tránsito para el Estado de Aguascalientes y en particular, al incumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 119 del referido reglamento, siendo que, las actuaciones fueron realizadas por una autoridad estatal en materia de transporte público, para verificar el cumplimiento de obligaciones legales en esta materia y que el fundamento de actuación lo fue la Ley de Movilidad del Estado y no el referido Reglamento de Tránsito Municipal, de ahí que los argumentos expuestos, resulten inoperantes al no expresar las razones conforme a las cuales debiere aplicarse como fundamento legal el Reglamento de Tránsito y no el ordenamiento citado por la autoridad en su actuación.

Al respecto, es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/48, de la novena época, con número de registro: 173593, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indica:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni

concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non séquitur para obtener una declaratoria de invalidez.”

En relación al argumento de que el acta impugnada carece de los requisitos de fundamentación y motivación, al desconocer los motivos y fundamentos que la originaron.

Tales argumentos, resultan **INFUNDADOS**.

Es así, porque contrario a lo manifestado por la parte actora, el Acta de inspección impugnada si cumple con los requisitos de fundamentación y motivación en relación a las circunstancias, motivos y fundamentos.

Es así, porque en el Acta de Inspección impugnada (fojas **49 a 51** de los autos), se advierte lo siguiente:

“En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 13:07 horas del día 30 del mes de mayo de dos mil diecinueve, el c. Gerardo Jaime Ruiz Esparza, en mi carácter de inspector de la Dirección General de Transporte Público de la Coordinación General de Movilidad...

al encontrarme *****

...realizando las tareas de inspección en cumplimiento con los artículos 275 y 276 fracción I, II, III y VII de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes;...

...

me percaté que sobre el arroyo de la calle antes mencionada, circulaba un vehículo con placas *****, número económico y/o de identificación ***, marca Mercedes Benz, color Naranja con 26 ocupantes, quien se encuentra prestando el servicio de transporte público, procediendo a realizar la inspección sobre dicha unidad para determinar la forma en que se presta el servicio, solicitando al operador la documentación necesaria para prestar el servicio de transporte público colectivo urbano, en términos de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes y ordenamientos aplicables, en tal virtud se deja asentados los siguientes hechos: que se entiende la diligencia con quien manifiesta ser ***** ***** ***** *****...

... Manifestado asimismo por el operador respecto de los documentos solicitados motivo de la inspección que: No cuenta con

TERCER (cuarto conforme al orden planteado) y en el QUINTO (sexto en el orden planteado), que el acto impugnado es ilegal al incumplir con las formalidades que legalmente debe revestir el acto.

Lo anterior, porque Niega Lisa y Llanamente que exista una orden de verificación de autoridad competente, con lo cual, afirma, se violó lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

Los conceptos de nulidad de estudio son **INFUNDADOS**.

Es así, porque la ley especial de la materia que rige la inspección de transporte público es la Ley de Movilidad del Estado, siendo que la Ley del Procedimiento Administrativo sólo es aplicable de manera supletoria.

En lo específico no resulta aplicable el artículo 61 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, invocado por la parte actora, ya que el artículo 279 de la Ley de Movilidad del Estado, establece el marco especial de actuación para los inspectores actuantes.

Para mayor comprensión de lo aquí analizado, conviene transcribir los artículos 1º, primer párrafo, 8 y 279, párrafo primero y segundo de la Ley de Movilidad del Estado y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes:

“Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes

ARTÍCULO 1º.- *Esta Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto tutelar el derecho a la movilidad, estableciendo las bases, normas y principios para la planeación, programación, proyección, regulación, coordinación, implementación, gestión y control de la movilidad de personas y transporte de bienes en el Estado y sus municipios, mediante la creación de sistemas de movilidad integral y de transporte.*

...

ARTÍCULO 8º.- *En todo lo no previsto por la presente Ley se aplicarán de manera supletoria la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Aguascalientes, el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes, la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, el Código de Procedimientos Civiles del Estado Aguascalientes, la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes y la Ley de Expropiación para el Estado de Aguascalientes, según corresponda.*

...

ARTÍCULO 279.- *Tratándose de los servicios de transporte público, cuando los inspectores de la CMOV adviertan una irregularidad en la prestación del servicio que pueda implicar un riesgo grave para la seguridad o el orden público, podrán detener, asegurar y en su caso confinar, por sí mismos o con el auxilio de la fuerza pública, los vehículos que prestan dichos servicios y, en su caso, retirar placas o documentos del vehículo que corresponda.*

En estos casos, la autoridad deberá levantar un acta circunstanciada, en donde se determinen las circunstancias de hecho y los fundamentos de derecho que determinen la procedencia de providencia cautelar, la cual sólo podrá dictarse por el tiempo necesario para corroborar la gravedad del riesgo en la prestación del servicio y para señalar las medidas concretas que debe tomar el concesionario o permisionario para corregir las irregularidades encontradas.

...

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes

ARTÍCULO 61.- Los verificadores, para practicar visitas, deberán estar provistos de orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y estar debidamente fundada y motivada.

..."

De lo transcrito se obtiene lo siguiente:

- La Ley especial en materia de transporte público de personas es la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes;
- La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, solamente es aplicable de manera supletoria a la materia de transporte público;
- La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, establece las reglas generales para realizar vistas de verificación, estableciendo en su artículo 61, la condición de que las visitas de verificación sean precedidas de una orden de verificación.
- El artículo 279 de la Ley de Movilidad del Estado (ley especial aplicable), establece un régimen de excepción en el cual no es necesario que los inspectores cuenten con orden previa de inspección, ello, cuando se advierta una irregularidad en la prestación del servicio que pueda implicar un riesgo grave para la seguridad o el orden público, lo que faculta a los inspectores a detener, asegurar y en su caso confinar, por sí mismos los vehículos

que prestan dichos servicios, debiendo la autoridad en estos casos, levantar un acta circunstanciada en donde se determinen las circunstancias de hecho y los fundamentos de derecho que determinen la procedencia de providencia cautelar.

Así, en el caso de estudio y conforme al acta de inspección que previamente fuera transcrita, se advierte que se colmaron todos los elementos para la aplicación de la situación de excepción establecida en el artículo 279 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, en virtud de que el inspector advirtió la circulación de un vehículo prestando el servicio de transporte público, con veintiséis pasajeros a bordo y sin que se contara con permiso ni autorización para la prestación de dicho servicio, por lo que el inspector procedió a levantar el acta de inspección que se impugna, circunstanciando los hechos e invocando los fundamentos antes referidos y determinando una medida cautelar consistente en la suspensión del servicio y el retiro de circulación de la unidad, siendo que los hechos que motivaron la inspección eran irregulares e implicaban un riesgo grave para la seguridad y orden público, ello, en virtud de que un vehículo ofreciendo transporte colectivo urbano a pasajeros sin contar con la concesión o permiso correspondiente, es una situación que sin duda resulta grave y que amerita la acción inmediata del inspector, con el fin de impedir que la conducta irregular se siga cometiendo.

Luego, no resulta aplicable el artículo 61 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, invocado por la parte actora, siendo infundados los conceptos de nulidad en estudio.

Continuando con el examen de los conceptos de nulidad, aduce la actora en el CUARTO de los del escrito inicial de demanda (quinto, conforme al orden propuesto por la parte actora), que el acto impugnado carece de los requisitos de fundamentación y motivación en relación a la multa impuesta.

Agrega en el QUINTO concepto de nulidad (Sexto

co, conforme al orden expuesto) que igualmente carece de los requisitos de fundamentación y motivación, ya que nunca le fue entregada **boleta de infracción alguna** y que el supuesto oficial es omiso en cuanto especificar el hecho concreto real y específico por el que se sanciona y que en el acta de infracción no se distingue nada de lo actuado por el oficial de tránsito.

Los conceptos de nulidad de estudio son **INOPERANTES**, al estar basados en premisas falsas.

Es así, porque de ninguna de las constancias que obran en el expediente, se advierte la existencia **ni de una multa, ni de un boleta de infracción ni mucho menos la intervención de un “oficial” (de tránsito)**, por lo que los argumentos parten de una premisa falsa, por lo que en nada práctico llevaría el análisis de los mismos, de ahí su inoperancia.

Al respecto, resulta aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 108/2012, de la décima época, con número de registro: 2001825, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro y texto dice:

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida.”

También, es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia XVII.Io.C.T. J/5, de la décima época, con número de registro: 2008226, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que al rubro y texto indica:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un

postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes.”

Continúa manifestando la parte actora en el SEXTO (Séptimo en el orden propuesto) de los conceptos de nulidad que el Acta impugnada es ilegal al **carecer de firma autógrafa**, apreciándose a simple vista que la misma se encuentra con firma facsimilar o fotocopia.

El concepto de nulidad de estudio es **INFUNDADO**.

Es así, porque del Acta de Inspección que la actora acompañó a su demanda, se advierte que se asentó; no sólo la **presencia del inspector actuante**, la persona con quien se entendió la inspección —*********— y la de los testigos de asistencia; sino la **hora y fecha** en que se dio por terminada **“firmando los que intervinimos en la presente y quisieron hacerlo”** además de entregar una **copia del acta al inspeccionado**, sin que se haga por tanto necesaria la existencia de firma autógrafa por tratarse de solo una copia, además de que no existe disposición alguna que eleve a formalidad del procedimiento de inspección, la entrega al inspeccionado o verificado, de acta circunstanciada con firmas autógrafas de quienes hubieren intervenido en la diligencia.

Luego, si en la propia acta se asentó que fue firmada por quienes intervinieron en la diligencia de inspección, ante la existencia de firma del inspeccionado y testigos de asistencia, la afirmación de la demandada en el sentido de que el acta **no contiene** firma autógrafa y ante la constancia de entrega y notificación de copia del Acta de Inspección; la carga para comprobar la supuesta falta de firma autógrafa recaía sobre la parte actora en términos de lo dispuesto en el artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, de aplicación supletoria a la materia contenciosa administrativa, conforme a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, sin que al efecto la parte actora **haya ofrecido prueba alguna**, de ahí lo infundado del argumento de estudio.

Por último, la parte actora en el ÚNICO concepto de nulidad del escrito de ampliación de demanda, expresa que el acto impugnado es ilegal, porque contrario a lo asentado en el acta de inspección, la parte actora **SÍ cuenta con concesión vigente**, siendo que la parte actora presentó solicitud de renovación de concesión, sin que a la fecha la misma le haya sido resuelta; que tácitamente le fue autorizada al contar con placas y tarjeta de circulación y al haber realizado el pago para la explotación de la concesión y el pago de derechos por control vehicular.

Agrega la parte actora que la resolución emitida por el **Coordinación General de Movilidad del Estado de Aguascalientes** es a todas luces ilegal en virtud de que la misma proviene de un acto legislativo por demás contrario a derecho; asimismo, que el encargado de la Coordinación de Movilidad **no cuenta con facultades para expedir la respectiva convocatoria**, en términos de lo establecido por el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 13 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes y 9º del Reglamento Interior de la Coordinación de Movilidad del Estado de Aguascalientes.

Tales argumentos son **INOPERANTES** por extemporáneos.

Es así, porque la parte actora atacó en ampliación de demanda el **Acta de Inspección**, acto impugnado que acompañó a su escrito inicial de demanda y respecto de la cual planteó inicialmente los conceptos de nulidad que ya fueron motivo de análisis; en consecuencia, los conceptos de nulidad expresados en ampliación de demanda respecto de dicho acto devienen inoperantes al ser extemporáneos.

Lo anterior, porque ante el conocimiento del acta de inspección desde la presentación de de la demanda, el momento procesal oportuno para combatirla, lo era precisamente el escrito inicial de demanda, ello, en términos de lo dispuesto por el artículo 29, fracción VI de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo

para el Estado de Aguascalientes, por lo que tal concepto de nulidad en ampliación de demanda, deviene extemporáneo y por tanto inoperante.

Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que puede ser consultada en el Semanario Judicial y Su Gaceta; Novena Época, Registro: 169653, Tomo XXVII, Mayo de 2008, Materia(s): Administrativa, Tesis: VI.3o.A. J/67, Página: 911, cuyo rubro y texto establece lo siguiente:

“PRECLUSIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA, QUE PUDIERON ESCRIMIRSE EN EL ESCRITO INICIAL, Y QUE NO SE FORMULARON POR ALEGAR EL ACTOR, INDEBIDAMENTE, DESCONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO.

*El artículo 209 Bis del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, y su correlativo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevén el supuesto en que el actor en el juicio de nulidad alegue desconocer el acto impugnado y señalan en su último párrafo que si la Sala Fiscal resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreeserá el juicio en relación con el acto administrativo combatido; sin embargo, en el supuesto de que a pesar de concluirse que la notificación se realizó legalmente, la demanda de nulidad resulta presentada en tiempo, **deben declararse inoperantes los conceptos de impugnación vertidos en la ampliación de demanda, pues el particular tenía conocimiento del acto impugnado desde que promovió inicialmente**, pero indebidamente alegó su desconocimiento, atento al principio de preclusión consistente en que extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse.”*

Sin que pase inadvertido a esta Sala que en las constancias que obran en el expediente, no obra la supuesta “Convocatoria” expedida por el Coordinador General de Movilidad a fin de estar en aptitud de examinar su contenido.

Al ser **INFUNDADOS** e **INOPERANTES** los conceptos de nulidad expresados por la parte actora, lo que procede es **RECONOCER LA VALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO** consistente en el Aseguramiento de vehículo derivado del Acta de **inspección** con número de folio ********* instruida el *treinta de mayo de dos mil diecinueve*, por inspector adscrito a la Coordinación General de

Movilidad del Estado de Aguascalientes y mediante la cual, se dictan medidas de aseguramiento de un vehículo propiedad de la parte actora, al considerar que se encontraba realizando servicio de transporte público sin contar con concesión.

Por las razones que informan el presente fallo y con fundamento en los artículos 26, fracción VI, 27, fracción II, 59, 60 y 62, fracción I de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, se resuelve:

PRIMERO.- En términos de lo analizado en el TERCER considerando de esta sentencia, se decreta el SOBRESEIMIENTO en relación al supuesto Crédito Fiscal derivado de la inspección con número de folio ***** impugnada.

SEGUNDO.- En términos de lo Analizado en el CUARTO considerando de la presente sentencia, se decreta el SOBRESEIMIENTO en relación a la resolución **negativa ficta** que afirma, se configuró con el silencio de la autoridad, respecto a la *solicitud para la autorización del derecho de Renovación de Concesión para la Prestación de Transporte Público* supuestamente presentada.

TERCERO.- La parte actora no acreditó su acción de nulidad en relación al aseguramiento de vehículo destinado a servicio de Transporte Público, impuesto como medida de seguridad según Acta de Inspección con número de folio ***** levantada el *treinta de mayo de dos mil diecinueve*, por inspector adscrito a la Coordinación General de Movilidad del Estado de Aguascalientes.

CUARTO.- Se RECONOCE LA VALDEZ del Acta de inspección con número de folio ***** instruida el *treinta de mayo de dos mil diecinueve* por inspector adscrito a la Coordinación General de Movilidad del Estado de Aguascalientes y mediante la cual, se dictan medidas de aseguramiento de un vehículo propiedad de la parte actora, al considerar que se encontraba realizando servicio de transporte público sin contar con concesión o permiso temporal vigente.

QUINTO.- Notifíquese personalmente.

Así lo resolvió esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, por unanimidad de votos de los Magistrados Enrique Franco Muñoz, Rigoberto Alonso Delgado y Alfonso Román Quiroz, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes conjuntamente firman ante la Licenciada María Hilda Salazar Magallanes, Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

La resolución anterior se publicó en la lista de acuerdos del nueve de diciembre de los mil diecinueve. Conste.-

La C. Secretaria General de Acuerdos de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes:

CERTIFICA:

Que la presente impresión contenida en veinte páginas útiles de la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número **** **, concuerda fielmente con la sentencia original que obra en dicho expediente y que se encuentra firmada por los Magistrados que integran éste órgano jurisdiccional así como por la suscrita, las que se certifican a fin de notificar a las partes, a los *seis días del mes de diciembre de dos mil diecinueve.*- Doy fe.

LIC. MARÍA HILDA SALAZAR MAGALLANES
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA
ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL